

# Artículos

## La guerra en el segundo año del gobierno de ARENA

Angel Sermeño

### Resumen

*Análisis de la conducción y desarrollo de la guerra a partir del hecho incuestionable del empate militar. El artículo tiene en cuenta simultáneamente los desarrollos ocurridos en los tres agentes principales del conflicto salvadoreño: la Fuerza Armada, el FMLN y Estados Unidos. En el segundo año de gobierno de ARENA se distinguen cuatro fases en el desarrollo de la guerra, cuyo curso ha estado determinado por el desarrollo de los principales acontecimientos políticos y por el del proceso de diálogo-negociación.*

### 1. Introducción

Un examen de los hechos y de las tendencias manifiestas en el ámbito militar durante el segundo año de la gestión de ARENA revela a primera vista que la situación de empate entre las partes contendientes persiste<sup>1</sup>. A pesar del progresivo escalonamiento del conflicto en sus diversas etapas, ni la Fuerza Armada ni el FMLN se encuentran más cerca ahora de la victoria que hace once años, cuando formalmente dio inicio la guerra. En este sentido, las lecciones arrojadas por los acontecimientos militares suscitados durante el primer año de ARENA, sobre todo la clara convicción de que el empate militar puede prolongarse indefinidamente por las propias particularidades del conflicto salvadoreño, no han sido asimiladas ni aplicadas por igual en los círculos de decisión de la Fuerza Armada y del FMLN.

Mientras la Fuerza Armada continua operando bajo el esquema de guerra de baja intensidad impuesto por los estrategas norteamericanos, verdaderos conductores del aparato militar gubernamental; el FMLN ha readecuado hábil y creativamente sus esquemas tácticos para tomar la iniciativa militar cuando lo juzga oportuno y, sobre todo, ha impulsado un estratégico cambio de énfasis en virtud del cual pone el uso de toda su capacidad militar al logro de la consecución de sus objetivos políticos<sup>2</sup>. El FMLN, en consecuencia, ha asimilado con más creatividad y pragmatismo esas lecciones, pues ha apostado por darle una solución al conflicto que no es estrictamente militar.

La Fuerza Armada, en cambio, no ha querido enfrentar con realismo los cambios internos del proceso salvadoreño y, menos aún, se ha hecho

## El segundo año del gobierno de ARENA ha sido un año de diálogos y de guerra.

eco de las radicales transformaciones en el contexto internacional que apuntan igualmente hacia la adopción de soluciones pacíficas para los diversos conflictos regionales. De hecho, la Fuerza Armada ha mantenido, a lo largo del segundo año de la gestión de ARENA, el curso de la guerra de manera inalterable, poniendo todo su énfasis en ejercer el máximo posible de presión militar en las zonas tradicionalmente controladas por las fuerzas insurgentes.

La llegada de ARENA al poder ejecutivo generó diversas expectativas tanto al interior del ejército como dentro de las fuerzas insurgentes sobre las modificaciones operativas que debía sufrir la conducción de la guerra para intentar inclinarla cada bando a su favor. En el ejército, tal discusión llevó a una virtual lucha por el control de la institución castrense entre los partidarios de volver a las prácticas militares de los inicios del conflicto, proclives a implementar una política de tierra arrasada y otros esquemas operativos propios de una guerra sucia, y quienes, por su parte, estaban a favor de introducir algunas readecuaciones que perfeccionarían la aplicación del esquema de guerra de baja intensidad. La disputa fue resuelta a favor de los segundos, pues contaron con el decisivo apoyo de los estrategas norteamericanos y porque su planteamiento fue, en definitiva, más realista al reconocer las limitaciones del ejército en la lucha contrainsurgente. Las consecuencias prácticas de la introducción de esas modificaciones por parte de la Fuerza Armada se expresaron en el tratamiento poco tolerante que dio al movimiento de protesta popular y en la extensión de las tácticas propias de la guerra de baja intensidad en el área urbana<sup>3</sup>.

Las modificaciones operativas rebeldes en el primer año de ARENA estaban ya definidas e implementadas cuando el presidente Cristiani tomó el poder. Fundamentalmente, el FMLN quiso hacer del primer año del gobierno de Cristiani un año de definición bélica. Tal perspectiva fue reforzada por la postura inflexible e intransigente del gobierno y la Fuerza Armada en la mesa de negociaciones al negarse a depurar y reestructurar el

estamento militar. La intensificación de la actividad militar que concluyó con la ofensiva de noviembre de 1989 había sido preparada con antelación. El FMLN se había planteado como objetivo estratégico extender los teatros de su accionar ofensivo a nuevos e importantes escenarios. Se trataba de llevar la guerra a las ciudades, principalmente a San Salvador, así como a toda su periferia suburbana y, adicionalmente, imprimir mayor contenido político al accionar militar. El FMLN perseguía combinar la escalada bélica con el potenciamiento de sus perspectivas insurreccionistas<sup>4</sup>. Tras la ofensiva, el FMLN readecuó nuevamente su estrategia militar. En primer lugar, abandonó la hipótesis de una insurrección popular; en segundo lugar, mantuvo subordinada su actividad militar al logro de objetivos políticos. En el caso decisivo de las negociaciones, recurrió a la presión militar cuando el proceso entraba en etapas de estancamiento. Finalmente, reafirmó una vez más su capacidad de tomar la iniciativa militar cuando lo estimó oportuno, sorprendiendo con ello al ejército y mostrándole su incapacidad para neutralizar sus esquemas ofensivos.

La política norteamericana para el país también ha sufrido importantes transformaciones a la luz de un análisis más ponderado en torno a la capacidad militar de las partes en contienda. A diferencia de la extrema derecha salvadoreña, los estrategas norteamericanos de alto nivel no esperan el triunfo militar de la Fuerza Armada sobre los insurgentes<sup>5</sup>. Tal cambio de percepción es de suma importancia, pues quienes determinan la forma de conducir inmediata y directamente las estrategias contrainsurgentes son, precisamente, los círculos político-militares norteamericanos. De hecho, la mayor capacidad de fuego del ejército y el resto de las ventajas operativas que posee respecto de las fuerzas insurgentes serían imposibles de sostener sin el multimillonario apoyo norteamericano. No obstante, el elemento característico de la política norteamericana hacia el país en el último año ha sido la ambigüedad y la confusión. Por un lado, altos funcionarios de este gobierno se han pronunciado, en diversas ocasiones, a favor de una



solución negociada para el conflicto, pero, al mismo tiempo, en el orden práctico, no han modificado ni restringido sustantivamente los esquemas operativos del ejército. La Fuerza Armada no ha dejado de presionar militarmente para penetrar en las zonas controladas por el FMLN, lanzando continuas ofensivas y sus retenes han persistido en su política de agresión y acoso a las repoblaciones y a los refugiados. En el ámbito político, asimismo, las decisiones norteamericanas han estado orientadas a reforzar la posición de la extrema derecha nacional, enemiga declarada de cualquier solución negociada al conflicto.

Desde esta perspectiva, parecería que el glorioso fracaso de sus once años de política contrainsurgente en el país no ha querido ser debidamente asimilado o, al menos, que el compromiso norteamericano con la política de profesionalización de la Fuerza Armada, de la promoción al respeto a los derechos humanos y de la creación de esquemas auténticamente democráticos de convivencia social no es tan sincera como afirma ser. El hecho decisivo, con todo, estriba en que pragmáticamente los estrategas norteamericanos han toma-

do conciencia de que, bajo las actuales condiciones, es imposible continuar impulsando opciones militares para manejar la crisis del país. Por tanto, todo esfuerzo serio para poner fin a la guerra pasa forzosamente por la negociación, única vía para alcanzar la reconciliación nacional.

## 2. Necesidad histórica de una solución negociada al conflicto

La incapacidad de la Fuerza Armada para derrotar al FMLN a lo largo de los once años de intenso y destructivo conflicto ha marcado el fracaso de la política contrainsurgente más sofisticada que los expertos norteamericanos hayan podido concebir. El Salvador ha sido el país donde Estados Unidos ha puesto a funcionar toda su capacidad analítica, en términos de táctica y de concepción, para manejar y ganar las guerras irregulares (*small war*)<sup>6</sup>. Los oficiales estadounidenses han estado en la vanguardia de este esfuerzo contrainsurgente, dirigiendo la guerra (como estrategas, tácticos y planificadores) y tomando decisiones críticas sobre la conducción de la misma. No obstante, once años de masiva participación



norteamericana en El Salvador no les han permitido conseguir su principal objetivo: derrotar a las fuerzas insurgentes. Su política exterior en el país también ha fracasado en otros objetivos importantes (sobre todo a nivel retórico, aunque para ellos en términos pragmáticos menos esenciales) como son conseguir la subordinación de la Fuerza Armada a la autoridad civil, el respeto a los derechos humanos y en hacer del cuerpo de oficiales un cuerpo operacionalmente efectivo<sup>7</sup>.

En contrapartida, el FMLN ha demostrado, sobre el terreno de la confrontación armada, que es un formidable opositor capaz de sostener la guerra por tiempo indefinido. Un estudio de las diversas etapas de la prolongada confrontación militar permite concluir que las fuerzas revolucionarias han sido más capaces que sus contrarios de aprovechar las debilidades y contradicciones de las fuerzas enemigas. Tal capacidad es la que ha permitido provocar saltos cualitativos en la marcha de la guerra, los cuales siempre han alejado cada vez más al ejército gubernamental de la posibilidad de derrotar a los rebeldes mientras que, al mismo tiempo, han fortalecido a éstos. Los sucesivos esfuerzos contrainsurgentes siempre han terminado potenciando en el FMLN un accionar militar más depurado y eficiente, de alta movilidad y flexibilidad, de la misma manera que han aumentado las dimensiones de la guerra, tanto en la escalada de su intensidad como en la progresiva extensión territorial<sup>8</sup>.

Estos hechos objetivos apuntan hacia una indefinida e injustificada prolongación del conflicto bélico, los cuales, aunados a los cambios trascendentales en el equilibrio del poder mundial suscitados en los últimos años, han llevado a la búsqueda de una solución negociada al conflicto. La guerra en El Salvador ya no se justifica ni posee salida militar. Los cambios de Europa del este han dejado sin pretexto a quienes utilizaron la retórica de la guerra fría para escalar y profundizar las dimensiones de la guerra en el país. Además, en los cálculos de los arquitectos de la política exterior norteamericana la correlación regional de fuerzas favorecería un acuerdo negociado que, en definitiva, sería contrario a los intereses del FMLN y les posibilitaría de forma decorosa soslayar el fracaso

de su política contrainsurgente. En parte, ello explica que Washington y Moscú presionen conjuntamente a favor de un acuerdo negociado. Cuba y Nicaragua, por su parte, que presuntamente serían las principales fuentes de aprovisionamiento logístico al FMLN, tampoco se encontrarían en disposición para ayudar, más allá del apoyo moral solidario, a las fuerzas revolucionarias salvadoreñas.

Por todas estas razones, las soluciones estrictamente militares ya no son viables en El Salvador. Ninguno de los protagonistas involucrados podría intentarlas sin exponerse a sufrir serios reveses políticos. Sobre todo quedar sin respaldo y aislado de las fuertes corrientes históricas que dirigen los cambios de los procesos internacionales y regionales. De hecho, cabe reconocer que, en el último año, el proceso de diálogo-negociación ha experimentado novedades cualitativas y cuantitativas aún y cuando aún debe superar enormes escollos para procurar una solución política al conflicto salvadoreño<sup>9</sup>.

### **3. La dinámica militar del segundo año del gobierno de ARENA**

Pueden distinguirse fácilmente cuatro etapas en el desarrollo de la guerra a lo largo del segundo año de ARENA. El primer período comprendió de julio a octubre de 1990 y se caracterizó por el desarrollo de la actividad militar al lado de la marcha del proceso de diálogo-negociación. De esta manera, el entrampamiento de las negociaciones marcó directamente un tensionamiento de la actividad militar. En noviembre, tuvo lugar un segundo momento, cuando el FMLN realizó un importante esfuerzo ofensivo destinado a mostrar al ejército su capacidad combativa y a desmentir con hechos concretos la triunfalista retórica castrense. El tercer período abarcó el primer trimestre de 1991. En este momento, la actividad ofensiva insurgente mostró un bajo perfil, motivada por el acontecimiento de un par de hechos políticos desfavorables para el FMLN, que aconsejaban en el terreno militar una actitud de moderación. Además, la realización de elecciones para alcaldes y consejos municipales en marzo dominó el conjunto de sucesos nacionales. El FMLN, evidenciando

un novedoso comportamiento, aprovechó tal ocasión para aplicar una nueva estrategia insurgente, capitalizando el potencial del evento electoral para fortalecer la solución negociada del conflicto. Finalmente, en la cuarta etapa, de abril a junio, se produjo un progresivo escalonamiento de la actividad ofensiva de ambos contendientes a la luz de un nuevo estancamiento del proceso de negociación.

En síntesis, el curso de la guerra ha estado orientado por el desarrollo de los principales acontecimientos políticos, en el marco de un proceso de mutua codeterminación. Ahora, sin embargo, puede afirmarse que la guerra evoluciona determinada por la marcha del proceso de diálogo-negociación y no a la inversa, como había sido lo característico en el pasado reciente.

### 3.1. Guerra y diálogo

Una de las características más constantes del proceso socio-histórico nacional durante el gobierno de ARENA ha sido la estrecha relación existente entre el curso adoptado por el proceso negociador y la dinámica específica adquirida por la confrontación militar. Durante el segundo año de gestión de ARENA, el gobierno y el FMLN sostuvieron once encuentros de diálogo-negociación. Cada uno de ellos estuvo acompañado por un claro escalonamiento de la dinámica militar, correlativo al tensionamiento en el desarrollo de las conversaciones de paz. En este sentido, el segundo año del gobierno de ARENA ha sido un año de diálogos y de guerra.

Los tres primeros encuentros se efectuaron en el tercer trimestre de 1990. Todos ellos compartieron la esterilidad de resultados, el endurecimiento de las posturas de las partes —sobre todo la gubernamental— y el consiguiente estancamiento del proceso que, tras casi nueve meses de mediación de la ONU, cerró el año sin que las negociaciones registraran avance alguno. De forma paralela, la actividad militar insurgente experimentó un sensible incremento<sup>10</sup>, hasta desembocar, al finalizar el año, en la mayor escalada bélica registrada en el país, desde los sucesos de noviembre de 1989.

Durante los dos encuentros de San José, las

negociaciones se entramparon por la inflexible postura de la Fuerza Armada en los aspectos relativos a su depuración y reestructuración. Al estancarse las conversaciones, el tono de la retórica ideológica de las partes se elevó al mismo tiempo que la guerra recrudecía considerablemente<sup>11</sup>. En octubre, a la vista del *impasse* de las conversaciones, el mediador de la ONU se vio obligado a convocar un encuentro con carácter de urgencia. Entre tanto, los rumores sobre las nuevas acciones ofensivas de gran envergadura por parte del FMLN se multiplicaron. Frente a esas advertencias, el ejército multiplicó sus esfuerzos para fortalecer su retaguardia estratégica, mediante el despliegue de cercos de seguridad en San Salvador y en otras ciudades del país, a la vez que intensificó sus operativos de rastreo en las zonas de tradicional presencia del FMLN. Sobre todo, orientó sus tareas de patrullaje a la localización de “corredores” insurgentes de abastecimiento logístico.

Por su parte, el FMLN incrementó sus acciones de hostigamiento contra posiciones fijas del ejército, redobló sus acciones de comando en las zonas urbanas, particularmente en San Salvador, y aumentó su actividad de sabotaje contra el tendido eléctrico del país. La modalidad ofensiva del FMLN se impuso sobre los esquemas defensivos del ejército que no lograron impedir la puesta en marcha de los planes rebeldes.

En este contexto, las acciones ofensivas insurgentes más destacadas en ese mes se escenificaron en el área urbana de San Salvador y tuvieron como objetivos: el Centro Penal La Esperanza, las instalaciones de la Fuerza Aérea y las instalaciones del Ministerio de Defensa. El ataque de mayor envergadura fue el realizado contra la base aérea de Ilopango. En la acción, el FMLN utilizó fuego de fusilería, lanzacohetes *RPG-18* y *RPG-7*, así como morteros y catapultas caseras para lanzar explosivos de diversa naturaleza, entre ellos recipientes de gas licuado cargados con dinamita (“tepezcuintles”). El ataque se efectuó desde las populosas colonias Santa Lucía y San Bartolo, localizadas en los costados poniente y norte de las instalaciones de la Fuerza Aérea. La acción se prolongó durante tres horas. La envergadura del ataque impidió alzar vuelo a los helicópteros estacio-

nados en los hangares de Ilopango; el refuerzo aéreo utilizado para repeler a las fuerzas insurgentes llegó de otras guarniciones. El FMLN realizó, de forma simultánea al ataque contra la Fuerza Aérea, diversas acciones de hostigamiento en toda la periferia norte y noreste de la capital, en los sectores de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y Soyapango.

La magnitud de las acciones rebeldes provocó desconcierto y descontrol en la cúpula castrense. Su contraofensiva comprendió, a principios de noviembre, un intenso bombardeo de saturación, aéreo y de artillería, contra el cerro de Guazapa y zonas aledañas. Posteriormente, en el marco de una amplia campaña de acoso contrainsurgente, el ejército recuperó coyunturalmente toda la zona norte de Morazán, viejo y sólido bastión rebelde.

### 3.2. La ofensiva de noviembre de 1990

La iniciativa bélica, con todo, continuó en manos de la insurgencia. El FMLN consideró oportuno recurrir a la presión militar, en virtud de que el ejército y el gobierno mostraban una actitud intransigente en el tema de la desmilitarización de la sociedad<sup>12</sup>. El 20 de noviembre, el FMLN emprendió una nueva maniobra nacional, denominada "Castigo a la Fuerza Armada antidemocrática", con ataques simultáneos a posiciones militares en siete departamentos y once ciudades del país. Los escenarios principales de la actividad bélica fueron Morazán, San Miguel, Usulután, Chalatenango y San Salvador, pero la campaña no se limitó a esos departamentos. En San Salvador, el primer día de la campaña, el FMLN atacó otra vez las instalaciones de la Fuerza Aérea, donde destruyó un avión de reconocimiento del tipo O-2. En Usulután, la intensidad y prolongación de los combates fueron tales que parecieron más propios de una guerra regular que de una guerra de guerrillas. El 23 de noviembre, en las inmediaciones de Santa Elena, el FMLN derribó un avión A-37 *Dragonfly* mediante el disparo de un misil SAM-7, cuando la aeronave apoyaba a unidades de infantería. El 1 de

diciembre, columnas rebeldes atacaron con fuego de morteros, lanzacohetes RPG-7 y fusilería, las posiciones militares que custodiaban las presas hidroeléctricas *5 de noviembre* y *Cerrón Grande*, en el departamento de Cabañas. El 4 de diciembre, el FMLN derribó un avión AC-47 artillado, con un misil SAM-14. El hecho ocurrió en el área de la Laguna, en las proximidades del Volcancillo (Chalatenango), cuando el avión daba apoyo logístico a tropas de infantería que combatían con columnas rebeldes. A la altura del 10 de diciembre, el FMLN había realizado doce ataques contra diversas guarniciones mayores de la Fuerza Armada (Tercera, Cuarta y Sexta Brigadas de Infantería, Destacamento Militar Número Uno, Fuerza Aérea, etc.). El 12 de diciembre, el gobierno hondureño informó que 200 efectivos del batallón élite Bracamonte habían corrido en desbandada a refugiarse en ese país, huyendo del FMLN. Los efectivos del Bracamonte habían sostenido recios combates por más de 40 horas con columnas rebeldes y en el momento de mayor necesidad no contaron con el decisivo apoyo aéreo.

En realidad, durante la campaña ofensiva rebelde, la peor parte en la Fuerza Armada la llevó la aviación. En el transcurso de la ofensiva, el FMLN derribó tres aviones y tres helicópteros; y averió nueve helicópteros más. En un principio, algunos jefes militares, en un esfuerzo para disimular su consternación, intentaron desmerecer las repercusiones de la introducción de los misiles, y aseguraron que la Fuerza Aérea tomaría las medidas pertinentes para contrarrestarlos. Sin embargo, conforme empezaron a caer aviones y helicópteros, el propio comandante de la Fuerza Aérea, general Rafael Villamariona, reconoció que "el FMLN está poniendo en bastante dificultad a nuestras unidades. Estamos realmente desesperados".

La campaña ofensiva rebelde mostró significativos avances en materia militar así como también evidenció la capacidad de la dirigencia insurgente para asimilar positivamente sus errores pasados.

**Mientras más tiempo tome a la conciencia nacional comprender esta realidad más se hipotecará el futuro de la nación.**



En términos estrictamente militares, la novedad principal consistió en la introducción de los misiles tierra-aire. Con ellos, el FMLN ocasionó un drástico giro en la correlación militar, pues el uso eficiente de ese sofisticado armamento neutralizó a la Fuerza Aérea, la ventaja táctica más importante del ejército gubernamental<sup>13</sup>. La movilidad aérea ha representado una limitante importante para la actividad insurgente durante la mayor parte de la guerra. Al introducir el uso de este nuevo armamento, el FMLN ha logrado, inicialmente, mantener en tierra las aeronaves de la Fuerza Aérea y, posteriormente, modificar su uso de una manera considerable, restándoles eficacia. Desde entonces, la mayor parte de los vuelos son realizados en horas nocturnas, cuando las naves son prácticamente invisibles desde tierra, pero también son menos efectivas y más susceptibles a los peligros naturales. De la misma forma, en las zonas de control guerrillero, los vuelos han sido reducidos considerablemente. En la tropa de infantería, la falta de apoyo aéreo ha minado sensiblemente la moral de combate. En el transcurso de la guerra, la tropa se había habituado a depender del respaldo aéreo, que la cubría desde el aire, la reabastecía y de ser necesario, la sacaba rápidamente de la zona de combate. Ahora, en cambio, ya no cuenta con ese apoyo decisivo.

No obstante, el FMLN ha restringido exclusivamente el uso de los misiles a sus zonas de control con el propósito de no justificar un mayor involucramiento norteamericano, que forzosamente escalaría aún más la dinámica militar. Otro rasgo novedoso de la ofensiva fue su carácter limitado. El FMLN se circunscribió a atacar únicamente objetivos militares y no utilizó a la población civil como escudo protector. En síntesis, con el esfuerzo ofensivo de fin de año, el FMLN mostró categóricamente que poseía la capacidad de tomar la iniciativa militar cuando así lo estima oportuno, obligando a la Fuerza Armada a realizar despliegues extraordinarios para mantener la situación de indefinición militar. Y, además, que ya no busca conseguir un desenlace del conflicto por medios estrictamente militares, sino que, por el contrario, presiona militarmente para forzar una solución negociada de la confrontación armada.

### 3.3. Guerra y elecciones

El comportamiento militar del FMLN en el primer trimestre de 1991 continuó subordinado a la marcha del proceso de negociación y al impacto de otros acontecimientos relevantes en la vida política nacional. En concreto, las elecciones para la asamblea legislativa y los consejos municipales, llevadas a cabo el 10 de marzo, se convirtieron en un acontecimiento político novedoso, que marcó el curso del proceso político salvadoreño. Se trató, como en las seis anteriores rondas electorales de la década pasada, de comicios efectuados en un contexto de guerra. No obstante, a diferencia de aquellas, las elecciones del 10 de marzo, sobredeterminadas por los avances registrados en el desenvolvimiento del proceso de diálogo-negociación, adquirieron la potencialidad real de constituirse en un elemento para la paz. La participación decidida de la oposición política real, representada en la presencia más amplia de la izquierda, junto a un trascendental cambio de actitud del FMLN frente a los comicios, hacían de éstos un instrumento



para la paz<sup>14</sup>.

El FMLN inclinó a su favor el significado político de los comicios al vincularlos con el avance del proceso de negociación. Las elecciones fueron, en este sentido, una ocasión de primera magnitud para consolidar el cambio de estrategia del FMLN, en virtud del cual se desplazaría su anterior énfasis en la solución militar hacia la solución política<sup>15</sup>. Conseguir este objetivo implicó un esfuerzo de maduración en el pensamiento de los dirigentes del FMLN. A ellos, no les resultó fácil adoptar una posición definida desde el principio frente al proceso electoral. Por una parte, reconocían que las elecciones se realizarían en el marco de un proceso de negociación avanzado. Por otra parte, titubeaban ante la clara intención del ejército de utilizar la campaña electoral para ganar ventaja militar. Todos coincidían en no reconocerles formalmente legitimidad alguna a los comicios, sobre todo si se realizaban en un contexto violento y militarizado<sup>16</sup>, pero asimismo todos admitían la inconveniencia de entrar en contradicción con los partidos opositores si boicoteaban abiertamente el proceso electoral, como de hecho ocurrió en las elecciones presidenciales de 1989. La dirección del FMLN, finalmente, decidió no boicotear las elecciones —en un gesto sin precedentes en la historia electoral reciente del país—, pero de igual manera no permitió que éstas tuvieran lugar en unos treinta municipios que se encuentran bajo su control. El FMLN, también, sostuvo una tregua unilateral a nivel nacional el día de las elecciones, la cual, sin embargo, tuvo un alcance restringido. El 10 de marzo hubo combates en zonas de tradicional control insurgente en Chalatenango, Morazán y La Unión, pues la Fuerza Armada quiso demostrar ante los observadores internacionales que estaba presente en dichas áreas.

Además de las elecciones, el comportamiento militar del FMLN en el primer trimestre el año estuvo sobredeterminado por otros dos acontecimientos de importancia, ocurridos a comienzos de enero, y que, adicionalmente, estrecharon sus márgenes de maniobra política. El primero de ellos fue el anuncio del ejército sandinista, el 1 de enero, informando que cuatro oficiales de sus fuerzas y once civiles salvadoreños habían sido detenidos

por encontrarse comprometidos en la venta "ilegal" al FMLN de un lote de 28 misiles tierra-aire de fabricación soviética<sup>17</sup>. Luego de esta revelación inicial, siguió una serie de reuniones entre representantes del FMLN, el Ejército Popular Sandinista y funcionarios civiles del gobierno nicaragüense, las cuales concluyeron el 30 de enero, en Managua, con el compromiso del FMLN de devolver todos los misiles adquiridos del ejército sandinista. La devolución de los misiles se efectuó el 2 de febrero en tres sitios. Un primer lote de siete misiles fue devuelto en la población de Perquín (Morazán). Otros dos misiles fueron devueltos en Jucuapa (Usulután). Finalmente, la comandante Nidia Díaz hizo entrega de ocho misiles más en Managua, en la sede de la embajada de México. En total, el FMLN devolvió diecisiete misiles y entregó una lista sobre los lugares y fechas en donde disparó los otros once, que completaban el lote de 28 unidades, sustraído del arsenal del ejército sandinista. No obstante, el FMLN reiteró el derecho a poseer este tipo de armamento sofisticado y anunció que los misiles devueltos constituían únicamente una parte de su arsenal de medios de combate antiaéreo<sup>18</sup>.

Sobre el caso de los misiles se juxtapuso también, en los primeros días de enero, un segundo acontecimiento perjudicial para el FMLN. El día 2, un helicóptero *UH-1H* del ejército norteamericano regresaba a su base en Honduras, procedente del aeropuerto militar de Ilopango, tras cumplir una misión de abastecimiento logístico al grupo militar norteamericano asignado a El Salvador. La aeronave fue derribada por el fuego de fusilería rebelde a la altura del cantón San Francisco, en la jurisdicción de Lolotique (San Miguel). El helicóptero era tripulado por el teniente coronel David J. Pickett, el oficial técnico Daniel S. Scott y el cabo mecánico Earnes Dawson. Tanto Pickett como Dawson habrían sobrevivido al impacto de la caída de la aeronave, pero fueron rematados en tierra por una unidad rebelde. El gobierno norteamericano manipuló ese incidente como pretexto para reestablecer al ejército salvadoreño la ayuda militar suspendida por el Congreso apenas doce semanas atrás.

La incondicional voluntad de respaldo del go-



## Hacen falta nuevos pasos y concesiones radicales en la dinámica negociadora por parte de todos los actores directamente involucrados en la continuación del conflicto.

bierno norteamericano a la Fuerza Armada se expresó también en otros hechos concretos. El 29 de enero, en las instalaciones del aeropuerto militar de Ilopango, el jefe del Comando Sur, acompañado del embajador Walker, entregó al presidente Cristiani, en presencia del Alto Mando castrense, una nueva flotilla de aeronaves compuesta por tres cazabombarderos A-37 *Dragonfly* y seis helicópteros artillados del tipo *UH-1H*.

En términos estrictamente militares, por tanto, la intensidad de la actividad bélica durante el trimestre disminuyó relativamente, en comparación con la del último bimestre de 1990. El ejército incrementó su presión sobre las zonas de tradicional presencia rebelde. En la zona nororiental de Chalatenango, 3 mil efectivos del batallón Atlacatl, reforzados por efectivos del Destacamento Militar Número Uno y de la Cuarta Brigada de Infantería, prosiguieron un ininterrumpido operativo contrainsurgente, iniciado desde el 20 de diciembre anterior. Por su parte, el 10 de enero, fuerzas especiales combinadas de la Primera Brigada de Infantería y del batallón Bracamonte, apoyadas por aviones de combate y helicópteros artillados, iniciaron una fuerte operación de desalojo de fuerzas guerrilleras en el cerro de Guazapa, desplegando un intenso bombardeo de artillería y aviación. Tales esfuerzos ofensivos, sin embargo, arrojaron resultados aparentemente poco significativos, tanto en términos de desalojo de posiciones rebeldes como de desgaste de las fuerzas vivas del FMLN.

En contrapartida, el FMLN respondió aumentando selectivamente sus acciones ofensivas. Estas, aun cuando de pequeña envergadura, estuvieron dirigidas contra los principales centros de mando del ejército y, en menor medida, contra centros neurálgicos de la infraestructura energética, además de presionar esporádicamente sobre los puestos de seguridad en algunas zonas residenciales de estratos económicamente pudientes, poco impactadas por el desarrollo de la guerra en el pasado<sup>19</sup>. En el mes de marzo, la disposición del

FMLN de reducir al mínimo su accionar estrictamente ofensivo se expresó a través del decreto de treguas unilaterales en tres oportunidades: con ocasión de la muerte del Dr. Guillermo Ungo, de las votaciones del 10 de marzo y de la semana santa. No obstante, la actividad de sabotaje rebelde contra la infraestructura eléctrica cobró un renovado auge<sup>20</sup>. La jornada electoral del día 10 transcurrió, asimismo, en un ambiente de tensión bélica, pese a la tregua del FMLN, debido al ánimo provocativo del ejército, que se empeñó en incursionar en las áreas en disputa con el pretexto de garantizar el "normal desarrollo" de los comicios en esos lugares.

### 3.4. El problema de la territorialidad

Con sus altibajos, la actividad militar a lo largo de los meses de abril, mayo y junio se caracterizó por su progresivo y constante escalonamiento, particularmente en las zonas de tradicional persistencia rebelde. En estos meses, el proceso negociador recobró nuevamente el centro de la actividad política nacional. Consecuentemente, la actividad militar experimentó una sensible escalada paralela al desarrollo de las negociaciones de paz.

Durante el período en cuestión, en efecto, la Fuerza Armada intensificó sus operativos de rastreo y desalojo en las zonas de tradicional presencia insurgente. Los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Morazán y Usulután concentraron la mayor parte de los fuertes operativos contrainsurgentes. Cabe señalar que, además de los propósitos convencionales, estos operativos fueron desplegados con el objetivo de mostrar que la Fuerza Armada mantiene el control sobre la integridad del territorio nacional. El FMLN, por su parte, ha respondido al extraordinario esfuerzo contrainsurgente con la implementación de amplias acciones ofensivas contra diversos objetivos en diferentes puntos del país: subestaciones de distribución eléctrica, puestos de la defensa civil y guarniciones castrenses. El área metropoli-

tana de San Salvador también fue incluida dentro de los planes ofensivos rebeldes con un alto componente estratégico por constituirse ésta en la retaguardia de la Fuerza Armada. Así, la modalidad de acciones de asalto adoptada por los comandos urbanos se configuró en un eje principal del accionar ofensivo rebelde<sup>21</sup>.

Entre el 4 y el 27 de abril, en México, se desarrolló la más prolongada ronda de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla. El tema central de las conversaciones giró en torno a la espinosa cuestión de la reestructuración y depuración de la Fuerza Armada, así como de la problemática del cese del fuego. La ronda se concentró en el tema de las reformas constitucionales, y en este punto se cosecharon acuerdos modestos que apenas afectan algunos puntos de la superestructura jurídico-política del país<sup>22</sup>. Sin desmerecer el significado positivo de esos acuerdos, debe señalarse que el auténtico telón de fondo de los resultados de la ronda de conversaciones lo constituyó, no obstante, la discusión del tema del cese del fuego. Los planteamientos de ambos bandos durante el encuentro resultaron totalmente irreconciliables. La manera como, en definitiva, se resuelva esta decisiva cuestión marcará, en la práctica, el futuro de los acuerdos políticos que surjan de la negociación.

El desafío de las negociaciones, en efecto, consiste en diseñar una fórmula de cese del fuego que sea, por un lado, verificable y, por otra, que refleje la correlación real de fuerzas en el campo de batalla, de modo que no implique para ninguna de las partes desventajas estratégicas.

La propuesta sostenida hasta ahora por el gobierno adolece de serias deficiencias por la simplicidad y el irrealismo práctico de su formulación. Según el gobierno, el FMLN tiene como alternativa única concentrarse en ciertas zonas estipuladas para tal efecto, en donde gozaría de la seguridad apropiada, mientras se procede a su desarme y desmovilización definitivos. El esquema de la propuesta gubernamental corresponde al aplicado a la contra nicaragüense en la etapa final de la guerra en ese país. Se trata de un esquema improcedente, pues presupone un desequilibrio militar a favor de una de las dos partes que no se ha producido. Ade-

más, pide al FMLN que abandone de golpe las armas con la vaga promesa de permitirle participar en la vida política sin garantías sólidas que respalden ese ofrecimiento. El mismo hecho de que sea la Fuerza Armada la garante de ese proceso de transición muestra lo inconsistente de la propuesta.

El planteamiento del FMLN, en cambio, arranca de una evaluación objetiva y elemental: el cese del fuego no puede ser ocasión para que una de las partes adquiera gratuitamente ventajas que no ha conseguido en el campo de batalla. En este sentido, el FMLN rechaza taxativamente la pretensión gubernamental de quitarle las armas en la mesa de negociaciones. El desarme de cualquiera de las partes solamente es viable en la medida en que se adopten acuerdos sustantivos en la marcha del proceso negociador. EL FMLN sostiene, en este sentido, que su desmovilización es innegociable, a menos que la contraparte acepte negociar la desmilitarización total del país<sup>23</sup>. Para el FMLN, el cese del fuego, entonces, consistiría en un período previo de paz armada, en el cual cesarían las hostilidades a la vez que las unidades insurgentes conservarían sus armas y posiciones territoriales a la espera de acuerdos definitivos en la negociación que, al menos, impliquen un proceso de desmilitarización de la mayor parte del territorio nacional así como de un proceso paralelo de efectiva apertura política.

### 3.5. Desmovilización del FMLN vrs. depuración y reestructuración de la Fuerza Armada

Tras la ronda de México siguieron tres encuentros más de diálogo-negociación<sup>24</sup>. En ninguno de ellos se lograron cristalizar nuevos acuerdos y el proceso negociador entró en una etapa de franco estancamiento. El tema de la Fuerza Armada continuó siendo la pieza de entrapamiento del proceso de paz. Ante dicho estado de cosas, el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar se vio forzado a participar directamente en la superación del *nudo gordiano* de las negociaciones, a petición de las superpotencias, que han coincidido en la necesidad urgente de alcanzar la pronta pacificación del país. Entre la cita de México en abril y la intervención de Pérez de Cuéllar en el





proceso de paz en septiembre, el dinamismo de la guerra continuó *in crescendo* por parte de ambos contendientes bajo las características generales arriba apuntadas.

A finales de abril, en efecto, la actividad de sabotaje contra la infraestructura eléctrica del país experimentó un severo recrudescimiento, alcanzando dimensiones inusuales. El 17 de abril, el FMLN anunció que suspendería los sabotajes contra el sistema eléctrico dentro de las ciudades, no así en las zonas rurales del país. De hecho, el anuncio de tal disposición constituyó el inicio de una de las más contundentes campañas insurgentes contra la infraestructura eléctrica nacional en todo lo que va de la guerra. En los primeros días de mayo, la situación empeoró al punto que colocó en una situación "crítica y desesperada" al sistema nacional de distribución eléctrica<sup>25</sup>.

La devastadora campaña rebelde contra la red nacional de distribución eléctrica fue apenas un capítulo de la intensa actividad militar del mes. Mayo fue, de los cinco primeros meses del año, el que presentó la actividad militar más intensa. Ello debido, sobre todo, a que la Fuerza Armada intensificó su constante campaña de acoso insurgente en las zonas conflictivas del país. A finales del mes, el FMLN denunció, de hecho, que el ejército había iniciado un vasto operativo militar en ocho departamentos del país, con participación de más de cien compañías, seis batallones élite y veinte batallones regionales. El FMLN, en contrapartida, recrudesció la guerra en las ciudades<sup>26</sup>.

En junio, la situación militar se mantuvo inalterada. Ambos contendientes se embarcaron en un sobreesfuerzo bélico con la pretensión de fortalecer sus posiciones en la mesa de negociación. Las rondas de negociación en Caraballeda, Venezuela y Querétaro (México) concluyeron sin alcanzar acuerdos sobre ningún punto. El ejército intensificó su presión sobre las áreas de predominio insurgente, con el aparente propósito de confinar al FMLN en las zonas montañosas y despobladas. Para ello, desde el punto de vista estrictamente operativo, utilizó con mayor discreción el apoyo aéreo —sobre todo de helicópteros— y echó mano de su superioridad numérica, sobresaturando con efectivos las áreas de los operativos de rastreo y

desalojo. Las zonas urbanas y suburbanas de San Salvador, en cambio, fueron una vez más escenario de una intensa movilidad insurgente<sup>27</sup>.

El telón de fondo de la intensa actividad militar continuó siendo el desarrollo del proceso negociador y sus magros frutos cosechados. El hecho objetivo del virtual empate de la guerra no ha sido utilizado positivamente para formular una salida negociada del conflicto. La parte gubernamental ha utilizado todos los mecanismos a su alcance para retardar la negociación bajo la tesis de que el tiempo y la correlación internacional de fuerzas están a favor de la Fuerza Armada. Entre tanto, el ejército ha mantenido constante su plan de presión militar a la espera de que las fuerzas insurgentes se debiliten. En el fondo, se han querido imponer condiciones desventajosas de negociación al FMLN que culminen con su desarme unilateral. Existe un conjunto de razones objetivas que apuntan hacia el fracaso de tal estrategia<sup>28</sup>. La génesis y evolución del FMLN a lo largo de los once años de conflicto han hecho de él un fenómeno político-militar altamente desarrollado con una extraordinaria capacidad de adaptación a situaciones adversas y de una igualmente notable capacidad de acumulación de fuerzas. Pretender lograr en la mesa de negociación su derrota militar cuando no ha sido posible conseguirla en el terreno de confrontación es irreal e impráctico.

Los componentes mínimos de una negociación equilibrada y justa exigen, en este sentido, acuerdos específicos sobre el fin de la impunidad, la depuración y la reestructuración del ejército, sobre la desmilitarización y el papel democrático de la Fuerza Armada, así como sobre el cese del fuego. Estos acuerdos son la condición previa e imprescindible para garantizar la presencia política del FMLN en la vida nacional. El desafío de la pacificación auténtica estriba en abrir los cauces de una vida institucional democrática, a través de la negociación, que posibilite una adecuada participación del FMLN, durante el período de paz armada y después de ella, en la vida política nacional<sup>29</sup>. Únicamente con la previa depuración, reducción y reestructuración de la paz armada podrá procederse a la desmovilización de las fuerzas insurgentes. Mientras más tiempo tome a la conciencia nacio-

nal comprender esta realidad más se hipotecará el futuro de la nación.

#### 4. Ambigüedades de la política norteamericana

Las razones objetivas que muestran la inviabilidad de la búsqueda de opciones militares para resolver el conflicto salvadoreño han obligado al gobierno norteamericano a repensar los términos de su determinante involucramiento en la marcha del mismo. Tras la ofensiva de 1989 y la masacre de la UCA, la estructural ineficiencia, corrupción e impunidad del ejército salvadoreño se volvieron insostenibles. En ese momento, los voceros oficiales del gobierno estadounidense comenzaron a pronunciarse cada vez más a favor de propiciar soluciones negociadas a la guerra. En la práctica, sin embargo, ese radical giro en la formulación de su política hacia el país no ha sido fácilmente asimilable. Estados Unidos ha continuado preso de su política guerrerrista. Salvo algunos gestos del Congreso, orientados a favorecer el proceso de negociación; el resto de señales de los funcionarios estadounidenses ha servido, en definitiva, para fortalecer las posturas de la extrema derecha salvadoreña, anacrónica enemiga de la solución política del conflicto.

Las señales norteamericanas orientadas a conseguir la pacificación del país por medio de la negociación han sido sumamente escasas y con un valor más simbólico que real. En junio de 1990, la Cámara de Representantes aprobó congelar y condicionar la entrega de la mitad de los fondos asignados para 1991. En septiembre, estas discusiones se reanudaron en un marco de franco hastío y desánimo por haber contribuido a crear un ejército ineficiente, corrupto y violador de los derechos humanos<sup>30</sup>. Las discusiones sobre el sentido de la asistencia militar al país fueron, en realidad, las más intensas de toda la década de conflicto. En octubre, el pleno del senado estadounidense aprobó la propuesta Dodd-Leahy que congelaba el 50 por ciento de la ayuda de 85 millones de dólares, condicionándola al enjuiciamiento de los militares responsables de la masacre de la UCA, así como a un serio compromiso del gobierno salvadoreño en el proceso de negociación con el FMLN, y, por parte de éste, a su compromiso de no lanzar una

nueva ofensiva que pusiera en grave riesgo al gobierno de Cristiani. Esta decisión del Congreso no sólo causó un comprensible malestar en la filas del ejército salvadoreño, sino que fue aceptada a regañadientes por el propio presidente George Bush<sup>31</sup>.

El departamento de Estado, por el contrario, ha utilizado toda suerte de artificios para cooptar las iniciativas del Congreso. En septiembre de 1990, intentó boicotear la propuesta Dodd-Leahy, presentando otra contrapropuesta que favorecería la inflexibilidad gubernamental en la mesa de negociación, pues únicamente congelaba la asistencia militar por un breve período de sesenta días, después de los cuales dicha asistencia sería automáticamente restituida si no se concertaba un cese del fuego. Cuando esta maniobra fracasó, procedió a manipular las condiciones establecidas en la enmienda, utilizando todo tipo de argumentos especiosos. Ante todo, el gobierno norteamericano se preocupó de mantener abierto el cauce de dólares a la Fuerza Armada a través de otros canales con independencia de que éstos fuesen legales o ilegales<sup>32</sup>. Así, con independencia de la decisión de los legisladores, el gobierno estadounidense construyó artificios y encontró pretextos para mantener inalterado el nivel de asistencia militar y con él, el ritmo de la guerra. El incidente del asesinato de los asesores en Lolotique (San Miguel) fue hábilmente explotado para descongelar los 42.5 millones de dólares retenidos apenas tres meses atrás. El mismo vocero del Departamento de Estado admitió en su oportunidad que la ejecución de los militares norteamericanos no entraba en los criterios fijados por el Congreso para reestablecer la ayuda. A finales de junio, el presidente Bush decidió, finalmente, liberar 21 millones de dólares de los 42.5 millones retenidos. En otra muestra de respaldo incondicional al ejército salvadoreño, el gobierno norteamericano reemplazó los medios aéreos destruidos por el FMLN durante la ofensiva de fin de año con una nueva flotilla de aviones de combate A-37 y con helicópteros artillados UH-1H. Finalmente, los asesores militares norteamericanos no se preocuparon en utilizar su determinante rol en el conflicto para modificar o restringir el curso de los dinamismos bélicos.

Todas estas acciones han sido, obviamente, negativas para la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto. Con ellas, el gobierno norteamericano continuó otorgando un contradictorio respaldo al ejército salvadoreño. Más contradictorias e injustificadas aún con el presunto objetivo norteamericano de terminar con la guerra en El Salvador han sido las sistemáticas acciones de boicot de los funcionarios del Departamento de Estado a las gestiones del mediador de las Naciones Unidas en la marcha del proceso negociador. En febrero, un artículo del *New York Times* recogió declaraciones, atribuidas en su mayor parte al secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, que contenían desafortunadas y fuertes críticas a la labor de Alvaro De Soto. En lo esencial, las objeciones a De Soto sostenían que este no tenía una clara estrategia de hacia dónde conducir las negociaciones, ni cómo finalizar la guerra; también lo acusaban de no caer en la cuenta de las tácticas dilatorias, utilizadas por la insurgencia para evitar pactar el cese del fuego<sup>33</sup>. En mayo, el embajador norteamericano ante la ONU en el Consejo de Seguridad detuvo momentáneamente la aprobación de la comisión de verificación pedida en el acuerdo de derechos<sup>34</sup>. Como colorario de esta política de manipulación del proceso negociador, el gobierno norteamericano manifestó, por medio de su jefe militar de más alto rango, que si el desarrollo del proceso no correspondía a sus intereses, Estados Unidos podría, al igual que en Grenada, Panamá y el golfo Pérsico, invadir militarmente El Salvador<sup>35</sup>.

Mientras Estados Unidos mantenga su política hacia el país en esos términos tan ambiguos, las posibilidades para avanzar significativamente por la vía de la solución negociada al conflicto continuarán siendo muy restringidas y la prolongada cuota de dolor y destrucción del pueblo salvadoreño seguirá hipotecando el futuro del país.

## 5. Perspectivas de futuro

A principios de julio, el FMLN inició una nueva campaña militar, denominada "Si la FAES quiere las armas que ganen la guerra"<sup>36</sup>. Se trató de una campaña nacional de gran envergadura a

través de la cual el FMLN hizo patente su rechazo a la ostensible subida de tono de la retórica guerrillista de la Fuerza Armada, a la constante presión militar ejercida por los batallones élite en sus zonas de predominio y, finalmente, a los pobres frutos arrojados por el ciclo de rondas negociadoras tenidas entre mayo y julio. En términos militares, las fuerzas insurgentes hicieron gala de su renovada capacidad ofensiva para persuadir al gobierno de abandonar su pretensión de conseguir la desmovilización de sus combatientes sin la adopción e implementación de acuerdos políticos previos y verificables sobre el futuro de la Fuerza Armada y de la democratización del país. Según las fuentes rebeldes, en el transcurso de los intensos combates del mes, la Fuerza Armada habría sufrido 986 bajas. Esta ha sido una cifra únicamente superada por el total de las bajas de noviembre y diciembre de 1990, cuando el FMLN recurrió una vez más a la presión militar para mostrar la inviabilidad de las opciones militaristas para solucionar el conflicto nacional.

Durante el segundo año de ARENA, en consecuencia, aún y cuando se ha negociado intensamente no ha sido posible parar la guerra. Al contrario, el crónico estancamiento de las conversaciones mantiene siempre abiertas las posibilidades de más guerra, como de hecho ocurre en la práctica. En tal sentido, hacen falta nuevos pasos y concesiones radicales en la dinámica negociadora por parte de todos los actores directamente involucrados en la continuación del conflicto: el gobierno, la Fuerza Armada, Estados Unidos y el FMLN. Las condiciones estructurales de los procesos regionales y locales favorecen la finalización de la guerra y deben ser aprovechados en consecuencia. El secretario general de ONU utilizó toda su capacidad diplomática en septiembre para que el proceso de negociación diera un paso significativo en Nueva York. Los acuerdos adoptados aquí apuntan en la dirección correcta para alcanzar la paz. No obstante, de ello no se sigue que la paz esté a la vuelta de la esquina. El proceso todavía enfrenta obstáculos poderosos. Esperemos que no sea necesario un año más de tensiones bélicas para caer en la cuenta que más agonía y sufrimiento del pueblo salvadoreño no tienen justificación<sup>37</sup>.



## NOTAS

1. Desde 1985, la guerra había entrado en un patrón fijo aunque la situación de indefinición militar se hizo claramente evidente durante el último año del gobierno de la democracia cristiana, cuando los dos bandos se apoderaron de la iniciativa militar alternativamente y ninguno de los dos ejércitos predominaba claramente sobre el otro. Para conocer el análisis que fundamenta la tesis del empate militar ver Tom Gibb y Frank Smyth, "¿Es posible la paz en El Salvador?", *ECA*, 1990, 498-499: 246-277. Y, también, Centro Universitario de Documentación e Investigación "La guerra en el primer año del gobierno de ARENA" *ECA*, 1990, 500-501: 407-425.
2. La modalidad operativa del ejército gubernamental se caracteriza por usar tácticas convencionales para luchar en una guerra irregular, operando con formaciones a nivel de batallones, apoyados en vehículos blindados y helicópteros para movilizarse y dependiendo de un alto poder de fuego. El FMLN, en cambio, se caracteriza por su habilidad para aprovechar las ventajas que le proporciona su condición de fuerza irregular para definir los términos del combate sobre los teatros de operaciones.
3. Ver Antonio Cañas, "La guerra durante los primeros cien días de ARENA", *ECA*, 1989, 490-491: 669-682.
4. Ver *Proceso 457* y Centro Universitario de Documentación e Investigación, "Análisis militar de la ofensiva de noviembre", *ECA*, 1990, 495-496: 17-28.
5. En el análisis del comportamiento militar del primer año de ARENA realizado por el Centro Universitario de Documentación e Investigación se sostuvo que a partir de las nuevas percepciones de la guerra arraigadas en los círculos de inteligencia norteamericanos era posible esperar un cambio en su conducción, en el cual se abandonaría paulatinamente la estrategia contrainsurgente por una solución política. Dicha apreciación ha resultado acertada aún y cuando debe reconocerse que Estados Unidos no se terminó de decidir a lo largo del segundo año de ARENA a poner todo su poder del lado de la negociación. Ver el artículo del Centro Universitario de Documentación e Investigación ya citado.
6. Ver A. J. Bacevich, *et al.*, *American Military Policy and the Lessons Learned from El Salvador*, The John F. Kennedy School of Government, marzo de 1988.
7. Tommie Sue Montgomery "Combatiendo a la guerrilla: Estados Unidos y la estrategia de conflictos de baja intensidad en El Salvador", *ECA*, 1991, 510: 267-293.
8. Un interesante desarrollo de los rasgos fundamentales que caracterizan la evolución de la lucha militar a lo largo de la década de los ochenta puede verse en Mario Lungo, *El Salvador en los 80: contrainsurgencia y revolución*, San José, EDUCA-FLACSO, 1990, pp. 25-73.
9. Ver "El estado actual del proceso de diálogo-negociación", en *ECA*, 1990, 502: 575-588.
10. El transfondo de la reunión de diálogo celebrada en agosto se configuró a partir de la continuación de la campaña ofensiva de la Fuerza Armada "Héroes del 89", desplegando varios operativos contrainsurgentes en zonas de tradicional persistencia guerrillera, en los departamentos de Morazán y Chalatenango. Por su parte, en dicho período, el FMLN aumentó sus acciones ofensivas de desgaste de las fuerzas vivas del ejército y de sabotaje contra la infraestructura eléctrica. En ese contexto, atacó posiciones militares en Jucuapa y San Agustín (Usulután), Chinameca (San Miguel) y Lototiquillo y Chirilagua (Morazán). También atacó con fuego de fusilería la Tercera Brigada de Infantería (San Miguel), la defensa civil de San Marcos (San Salvador) y el Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA). Durante la segunda reunión de San José, realizada en septiembre, hubo nueve acciones ofensivas del FMLN y diez combates de encuentro en diez departamentos del país. Especial relevancia tuvieron las acciones registradas en San Salvador, donde el FMLN emboscó un camión militar, en una zona residencial, provocando heridas a una decena de soldados. Más tarde, unidades guerrilleras hostigaron posiciones militares en San Ramón, Ciudad Merliot y otros puntos de la capital. La más publicitada de esas acciones tuvo lugar en la Academia de Seguridad Pública, la cual fue atacada con fuego de artillería y fusilería.
11. El Ministro de Defensa, general Rene Emilio Ponce, confirmó en esa ocasión que el alto mando tenía "algunos indicios de que hay una preparación de acciones fuertes" en cualquier momento antes del 4 de noviembre, y anunció que la Fuerza Armada "ha desplegado todo un dispositivo militar en sus unidades de todo el país, para que no se vayan a dejar sorprender". En un pronunciamiento, emitido el 10 de octubre, en conmemoración del décimo aniversario de fundación del FMLN, la comandancia general, por su parte, advirtió al gobierno y a la Fuerza Armada que si continuaban oponiéndose a la desmilitarización de la sociedad y a los cambios estructurales que el país exigía, les vamos a demos-

- trar que sí podemos ganar la guerra... tenemos suficientes armas y logística para seguir esta guerra por mucho tiempo y tenemos total disposición y moral para permanecer todo el tiempo que sea necesario".
12. La comandancia general del FMLN justificó la campaña a partir de la necesidad de "responder militarmente a la impunidad, la represión, los operativos militares de la Fuerza Armada y a la intransigencia del gobierno al negarse a la desmilitarización total de la sociedad aferrándose a la permanencia de un ejército criminal".
  13. Christopher Marquis, "Dicen los asesores EE.UU. que los salvadoreños necesitan armas de alta tecnología y mayor adiestramiento", *Miami Herald*, 15 de enero de 1991.
  14. Ver "Las novedades de las elecciones del 10 de marzo", en *ECA*, 1991, 507-508: 71-76.
  15. Ver "Las elecciones del 10 de marzo de 1991. Sus resultados y su significado", en *ECA*, 1991, 509: 127-149.
  16. El desarrollo del proceso electoral se caracterizó, entre otras cosas, por la hostilidad desplegada por el partido ARENA y el ejército contra la oposición. Al mismo tiempo, la espiral de intensa violencia paramilitar del período alcanzó su clímax en la masacre de El Zapote y en el atentado incendiario que fuera objeto las instalaciones del *Diario Latino*.
  17. Con relación al caso de los misiles devueltos por el FMLN al Ejército Popular Sandinista y el caso de los asesores militares norteamericanos asesinados por combatientes del FMLN tras el derribo de su helicóptero, consultar: *Proceso* 458, 459, 460 y 461.
  18. Ricardo Gómez, "FMLN tiene más misiles dice comandante rebelde", entrevista al comandante Leonel González, *Diario Latino*, 1 de febrero de 1991, p. 9.
  19. El FMLN inauguró su nueva modalidad operativa con un ataque de los comandos urbanos contra el complejo militar del Ministerio de Defensa, al mediodía del 18 de febrero. Mas tarde, unidades del FMLN realizaron acciones de hostigamiento contra las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería (San Miguel) en dos oportunidades; contra el Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA), ubicado al sur de Casa Presidencial; contra las posiciones del batallón en la base aérea de Comalapa; contra la sede del Destacamento Militar Nº 4, en San Francisco Gotera; contra las instalaciones de la Refinería Nacional de Petróleo (RASA); contra las instalaciones vecinas a la subestación de CEL de Acajutla (Sonsonate); contra la subestación de CEL de Nuevo Cuscatlán (La Liber-
- tad); y, finalmente, en la noche del 26 de febrero, contra los puestos del ejército en la zona alta de las colonias Escalón y Lomas Verdes, al norte de San Salvador.
  20. En marzo, el FMLN atacó las instalaciones de las centrales hidroeléctricas del *Cerrón Grande* y *15 de septiembre* y la subestación de la CEL Natividad en Santa Ana. En algunas zonas rurales de los departamentos de Santa Ana, Cuscatlán y Usulután, el sabotaje a la infraestructura eléctrica fue, también, particularmente intenso. Ver *Proceso* 465, 466, 467.
  21. *Proceso* 470.
  22. Ver Carlos Acevedo, "Los alcances de la ronda de México" en *ECA*, 1991, 501: 409-429.
  23. *Ibid.*
  24. Caraballeda, 25 de mayo-2 de junio; Querétaro, 16-22 de junio, y México, 9-11 de julio.
  25. El 6 de mayo, el presidente de la CEL, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, afirmó que, debido a los sabotajes, el sistema nacional de distribución de energía eléctrica se encontraba "en un momento crítico y desesperado", al punto que "ésta es la situación más crítica que ha vivido la CEL" en once años de conflicto. En la madrugada del día 3 de mayo, columnas rebeldes atacaron, por segunda vez en el año, las instalaciones de la central hidroeléctrica del *Cerrón Grande*. Fuentes oficiales calcularon en unos 4 millones de colones las pérdidas. En las madrugadas del 5 y 6 de mayo, otras columnas insurgentes destruyeron torres y otras estructuras sostenedoras de líneas primarias de 115 mil voltios, dejando nuevamente fuera de servicio seis circuitos vitales del sistema. En la madrugada del 6 de mayo, comandos urbanos atacaron la subestación de la CEL de San Antonio Abad, ubicada al nor-poniente de San Salvador. Tres días después, fuerzas especiales del frente paracentral del FMLN atacaron las posiciones avanzadas del Destacamento Militar Nº 2, que daban seguridad a la central hidroeléctrica *5 de noviembre*. El 15 de mayo, fuerzas guerrilleras atacaron los puestos de seguridad de las instalaciones de la central hidroeléctrica *15 de septiembre*.
  26. Ver *Proceso* 475 y 476. Las acciones más relevantes de esta naturaleza comprendieron el ataque, el 21 de mayo, de fuerzas guerrilleras a posiciones avanzadas de la Quinta Brigada de Infantería, en los alrededores de la ciudad de San Vicente, hostigando con fuego de fusilería y con artefactos explosivos las instalaciones de la Brigada y las cascuartel de la Policía y Guardia Nacional. El 22 de mayo, comandos urbanos atacaron las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería, en San Salva-

- dor, lanzando desde el sector oeste de la guarnición, al menos 12 disparos de lanzacohetes *RPG-7* y *RPG-18*. Los disparos fueron realizados con la imprecisión habitual de los comandos urbanos. De todos los proyectiles lanzados, sólo uno hizo impacto en la unidad militar. Otro de los proyectiles impactó una casa particular, causando la muerte a dos señoras de 52 y 55 años, respectivamente. El 28 de mayo, los comandos urbanos reincidieron con un segundo ataque fallido contra la misma guarnición.
27. La actividad militar de junio se encuentra descrita con detalle en *Proceso 476, 477, 478 y 479*.
  28. Joaquín Villalobos "La paz: aceptar la realidad y convertirla en acuerdo", *Diario Latino*, 13-16 de septiembre de 1991.
  29. "¿Por qué no avanza la negociación?", en *ECA*, 1991, 501: 391-408.
  30. Comité de Control de Armas y Política Exterior del Congreso, *Obstáculos a la reforma: un análisis de los dirigentes militares de El Salvador*, publicado en el registro oficial del Congreso de los Estados Unidos el 21 de mayo de 1990.

31. "El amigo se está retirando y nos quiere dejar en el momento en que hemos caminado un largo y difícil sendero, con resultados provechosos", expresó el Ministro de Defensa, general Rene Emilio Ponce en una de las primeras reacciones de temor y malestar externadas por funcionarios del alto mando de la Fuerza Armada.
32. Cable de la agencia de noticias *IPS*, fechado el 30 de agosto, en Washington. También ver *Proceso 450*.
33. Ver *Proceso 463*.
34. Ver *Proceso 474*.
35. Ver "Crónica del mes de abril", en *ECA*, 1991, 510: 347-354.
36. Ver *Proceso 482* y "Crónica del mes de julio", en *ECA*, 1991, 513-514: 740-746.
37. Ver "El Salvador debe optar por al vida y la paz ahora", Pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", en *ECA*, 1991, 513-514: 634-642, así como también *Proceso 489*, y *Carta a las Iglesias 242*.

**Cuadro 1**  
Bajas mensuales de la Fuerza Armada,  
registradas por el FMLN (1990-1991)

Mes	Año	Cantidad
Julio	1990	
Agosto	1990	633
Septiembre	1990	598
Octubre	1990	313
Noviembre	1990	781
Diciembre	1990	409
Enero	1991	475
Febrero	1991	
Marzo	1991	782
Abril	1991	691
Mayo	1991	771
Junio	1991	508

Fuente: Radio Venceremos.

**Cuadro 2**  
Bajas mensuales del FMLN, registradas  
por la Fuerza Armada (1990-1991)

Mes	Año	Muertos	Heridos	Total
Julio	1990	122	55	177
Agosto	1990	114	50	164
Septiembre	1990	85	42	127
Octubre	1990	39	42	81
Noviembre	1990	164	141	305
Diciembre	1990	156	33	189
Enero	1991	67	57	124
Febrero	1991	45	49	94
Marzo	1991	195	164	358
Abril	1991	116	75	191
Mayo	1991	58	75	191
Junio	1991	64	24	88

Fuente: COPREFA.



**Cuadro 3**  
**Sabotaje a la infraestructura eléctrica del FMLN (1990-1991)**

Mes	Año	Nº de infraestructura
Julio	1990	
Agosto	1990	131
Septiembre	1990	32
Octubre	1990	
Noviembre	1990	312
Diciembre	1990	68
Enero	1991	62
Febrero	1991	
Marzo	1991	108
Abril	1991	132
Mayo	1991	258
Junio	1991	84

*Fuente: Radio Venceremos.*

